

¡¡ NUESTRAS VIDAS Y NUESTROS EMPLEOS VALEN MÁS QUE SUS BENEFICIOS!!

La crisis del coronavirus no ha dejado a nadie indiferente. En menos de 3 meses estado de alarma, confinamiento, ERTES, despidos, obligación de ir a trabajar sin medidas de seguridad, miseras, miles de contagios y muertes... Pero aunque quieran hacer parecer que esta crisis "ha caído del cielo", nada está más lejos de la realidad. La crisis del coronavirus ha tenido las consecuencias más graves en el ámbito sanitario y en el ámbito social y económico. ¿Cuáles son las causas reales de dichas consecuencias? ¿Es solo este virus la razón de la miseria, el sufrimiento y las muertes de tantas personas?

Esta crisis ha puesto de manifiesto también lo que veníamos aguantando: hemos soportado un sistema depredador que explota los recursos irremplazables de la tierra, del campo, del mar y hasta del aire. Un sistema que solo se perpetúa y se sostiene sobre la miseria de las gentes; hemos soportado unos gobiernos que han puesto en manos privadas todo nuestro patrimonio: sus riquezas naturales, su industria, su cultura, para seguir el mandato de este capitalismo global que nos rige. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo, nos ha sacudido y ahora nos exige actuar, confrontar, revolucionar.

Una sanidad que lleva años en proceso de privatización. Necesitamos una sanidad pública de calidad y universal para no morir.

Si bien la aparición de este nuevo virus supone un shock para cualquier sistema sanitario por la falta de vacunas y la rapidez de contagio, la pérdida de vidas humanas y la saturación del sistema sanitario del estado español ha sido consecuencia directa de las políticas sanitarias que se han llevado a cabo en los últimos años por parte de los gobiernos centrales del Estado Español y los diferentes gobiernos autonómicos de diferentes colores políticos. Desde que en 1997 PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria votaran a favor de la ley que permitía la sanidad concertada, el gasto en sanidad y su distribución no paró de caer y conducirse a la privada. Actualmente es el 5'5% del PIB mientras que en 2009 era del 6'77% y la media europea es del 7'5%. Además, dicho gasto cada vez se ocupa más en los conciertos sanitarios (sanidad privada) y menos en la red pública lo que provoca que más de la mitad de los centros sanitarios en la actualidad sean privados y un tercio de las camas de hospital.

En Andalucía, la situación de la sanidad pública también está determinada por la gestión neoliberal y privatizadora que los gobiernos anteriores del PSOE como ahora el del PP han hecho desde la Junta, cada uno con sus socios de gobierno. El colapso de hospitales no es nuevo en Andalucía. Ocurrió con motivo de la gripe estacional durante varios años. Desde 2003 el número de camas por habitante en el Servicio Andaluz de Salud no deja de descender. Tan sólo en los presupuestos de este año se aumentaba un 10% los gastos en conciertos sanitarios con empresas privadas. Mientras Andalucía es el territorio que menos camas tiene por cada 10.000 habitantes (217,13) en el Estado español.

Esto no ha impedido que en toda la crisis del coronavirus la sanidad privada haya tenido un papel menos que testimonial a la hora de atender los casos del coronavirus mientras que en la sanidad pública, equipados con bolsas de basura por falta de EPIs, los y las trabajadoras. No podemos olvidar que en esta crisis sanitaria las mujeres han jugado el papel principal ya que suponen más del 75% de todo el personal sanitario y que el 76% de ese mismo personal que se ha contagiado han sido mujeres, sufriendo la mayor tasa de contagios del mundo (particularmente en Andalucía, donde esta cifra asciende a un 30%). A nivel local, no olvidamos que las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, muy feminizado y con las altas de externalización por parte de los Ayuntamientos, han denunciado muchas veces en esta crisis sanitaria la ausencia de EPIs y la dificultad añadida de su trabajo, visitando a cada usuario en su hogar.

Es necesaria una ley de remunicipalización del SAD que mejore las condiciones de las trabajadoras que prestan el servicio así como la atención a los usuarios. No podemos obviar tampoco que el cuidado de lxs hijxs, lxs mayores y lxs emfemxs, la alimentación y limpieza de los hogares, han quedado en manos de las mujeres como un trabajo extra, gratuito y aún a día de hoy silenciado. Ni gobierno, ni patronal van a reconocer esta realidad y mucho menos tomará las medidas necesarias para poner fin a una desigualdad sobre la que se sustenta de manera gratuita este sistema

La patronal de la sanidad en necesaria complicidad con los diferentes gobiernos ha demostrado estos años que nuestras vidas quedan en segundo plano cuando se habla de la posibilidad de hacer negocios. Las decisiones de privatización y precariedad en el mundo de la sanidad no solo han costado miles de muertos por el coronavirus al conllevar el desmantelamiento de la pública sino que se traduce además en listas de espera que deterioran la salud de quienes no pueden permitirse la sanidad privada.

Es necesario decir alto y claro que debemos proteger la sanidad pública, aumentar su inversión, requisar de manera permanente y sin indemnización todos los recursos de la privada para ponerlos a disposición de la pública y acabar con el régimen de precariedad laboral que sufren los y las trabajadoras de este sector. Así mismo es necesario extender la seguridad social a las tareas de cuidados hoy cubiertas en su mayoría de manera gratuita por mujeres o en condiciones muy precarias y proteger el resto de servicios públicos como único colchón para la supervivencia y bienestar de muchas familias requiriendo todas las residencias de ancianos en manos de fondos buitres que han demostrado tener unas condiciones de atención a nuestros mayores indignas y creando una única red pública.

Al menos el 30,2% de personas fallecidas en Andalucía por Covid- 19 proceden de residencias de mayores, pero se da la paradoja que sólo el 19% de estas residencias son públicas. Los distintos gobiernos de la Junta han hecho que envejecer en Andalucía sea un negocio para las multinacionales del sector. Necesitamos un plan de construcción de residencias de mayores y centros de día públicos. Así mismo es urgente crear un sistema público de industria farmacéutica que asegure que vacunas y fármacos no sean un negocio en vez de un servicio. Ello no se podrá conseguir sin el impago de la deuda pública que nos impide aumentar el gasto social y nos condena siempre a más recortes, así como con una distribución de renta y riqueza radicalmente diferente.

Si no nos movilizamos, ninguna institución lo hará por nosotras y nosotros... hagamos que esta crisis no la paguen los y las trabajadoras

Estas últimas semanas también han demostrado que solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Este gobierno de coalición no está dispuesto a asumir una política que se enfrente a los intereses de los más ricos como ha demostrado la organización de la desescalada y los miles de millones de euros que se han puesto a disposición de las empresas para nuevamente, que la deuda privada se convierta en pública mientras que las familias y los y las trabajadoras vuelven a tener que endeudarse para comer, pagar el alquiler o trabajar obligados sin medidas de seguridad básicas... al mismo nivel están las direcciones sindicales de CCOO y UGT, las cuáles alaban la paz social y se conforman con protestar en los medios de comunicación porque no se les llama a participar en una supuesta derogación de la Reforma Laboral, que aún está por ver.

Ya hemos visto ejemplos de cómo trabajadores y trabajadoras de Nissan, de Airbus, de Mercedes Benz, del campo o riders se han movlizado durante este difícil periodo. Hay que recuperar las calles para arrancar estas reivindicaciones gobierne quien gobierne, ello será el mejor antídoto para evitar que sea la extrema derecha quien canalice el descontento social y ejerza de única oposición al gobierno.

Hay que volver a gritar alto y claro que sí hay dinero. Lo tienen los banqueros que deben 65.000 millones de euros del rescate bancario, lo tiene la patronal del IBEX – 35 que solo en el año 2019 ganaron más de 35.000 millones de euros. Acabemos con estos privilegios para proteger nuestra sanidad y nuestro empleo. Acabemos con la desigualdad para construir una sociedad dónde la vida y el empleo de la mayoría esté por encima de los intereses particulares de los que más tienen.

